Señores Jueces de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador

Jueza Ponente: Dra. Karla Andrade Quevedo

Ab. Alfonso E. Ordeñana Romero y Ab. Nelson Ponce Murillo, en nuestras calidades de jueces provinciales de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro del caso No 2010-22-EP, ante ustedes, respetuosamente comparecemos para presentar el informe que nos ha sido solicitado, el mismo que lo esbozamos al tenor siguiente:

1. Que, hemos sido notificados con la providencia de fecha 11 de noviembre de 2022 a nuestros correos electrónicos institucionales el 30 de noviembre de 2022, mediante la cual se nos hace conocer del caso No. 2010-22, el mismo que corresponde a una demanda de acción extraordinaria de protección presentada el 01 de julio de 2022, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal de la Sala Especializada, mediante voto de mayoría, de fecha 02 de junio de 2022, notificada al día siguiente, la cual se encuentra ejecutoriada.
2. Que, conforme se señala en dicha providencia, en la pretensión y fundamentos de la demanda, *el accionante alega la vulneración de los siguientes derechos por parte del Tribunal de la Sala Especializada: tutela judicial efectiva; debido proceso en las garantías de cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, defensa, motivación y de recurrir; y, seguridad jurídica, previstos en los artículos 75, 76 numeral 1 y 7 literales a), 1) y m), y 82 de la Constitución. También alega la vulneración de los artículos 169 y 11 numeral 9 de la Constitución.*
3. Informe referente a la sentencia emitida por voto de mayoría dentro de la causa No 09901-2021-00175, debiendo indicar que conforme obra en el texto del fallo emitido mediante voto de mayoría el 2 de junio de 2022, a las 13h35, por los jueces provinciales que integran el IV Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, se menciona:

“El accionante señala que le ha sido vulnerado su derecho constitucional tal como: debido proceso en la garantía de ser juzgado por autoridad competente y de acuerdo al trámite propio del procedimiento, el derecho a la defensa, motivación, derecho de petición, derecho a la seguridad jurídica y el derecho a que las autoridades apliquen las normas y respeten los derechos de las partes.”

4. De la misma manera, en el fallo de mayoría que es objeto de la acción extraordinaria de protección, en su considerando SEGUNDO se señala: **Pretensiones:** Así mismo, el legitimado activo en su memorial en el que plasma su demanda señala como pretensión de su acción que en sentencia se declare la vulneración de su derecho constitucional, y se disponga lo siguiente: «...a) *Se declare la nulidad de la Resolución No. CAB-018-2021, dictada por el Comité de Administración de Bienes de la C.F.N. B.P. en sesión de 19 de agosto de 2021, así como de la Resolución No. CFN-B.P. SPAT-2021-002-R, dictada el 14 de octubre de 2021, por el Abg. Víctor*

Adrián Farinango Salazar, en calidad de Subgerente de Patrocinio de CFN B.P. b) Se declare la nulidad del procedimiento, disponiendo que se retrotraiga el trámite de solicitud de dación en pago, hasta el momento anterior al que se produjo la violación de los derechos constitucionales; y, c) Se ordene a la accionada, a que a través de la autoridad administrativa competente (Comité de Administración de Bienes), proceda a designar al perito de la terna correspondiente, con el fin de continuar con el trámite propio del procedimiento; d) Se deje sin efecto la orden de cobro notificada con fecha posterior al arbitrario rechazo de mi solicitud de dación en pago, mientras se tramite el procedimiento respectivo conforme a lo que se disponga en sentencia; e) Se disponga a la accionada que se abstenga de notificar una nueva orden de cobro o de iniciar cualquier procedimiento coactivo, relacionado con la deuda cuya extinción se pretende por medio de mi petición de dación en pago presentada, mientras se trámite dicho requerimiento, conforme se ordene en sentencia como parte de la medida de reparación del literal a) de este apartado; f) Que, se disponga a la accionada, que no podrá cobrar intereses respecto del plazo comprendido entre el momento de la presentación de la solicitud de dación en pago y el momento en que se cumpla con la designación del perito respectivo, una vez que ese tiempo es imputable a la conducta arbitraria de los funcionarios de la entidad accionada; g) Que, se disponga a la accionada que se abstenga de incurrir en nuevos actos arbitrarios que no es lo mismo que discrecional-, debiendo fundamentar sus decisiones conforme los documentos e informes respectivos, y de acuerdo a las normas del trámite propio del procedimiento; y, h) Que, como garantía de no repetición y para evitar nuevos actos arbitrarios por parte de los funcionarios de la entidad accionada, se ordene que se abstengan de determinar la supuesta "inconveniencia" de la dación en pago, en su sola discreción, debiendo entonces fundarse en los informes y documentos pertinentes una vez que se presenten como parte del trámite propio del procedimiento; y, además, en esta parte, pido que se disponga a la accionada, que, dentro del trámite pertinente, se considere el avalúo efectuado inicialmente en junio de 2018 (al tiempo de la concesión del crédito y de la aceptación de la garantía hipotecaria) así como en el 2019, como parámetros objetivos a partir de los cuales se deberá practicar el revalúo pertinente...».

5. En la sentencia emitida por el Tribunal y que es materia de la presente acción extraordinaria de protección se determinaron con claridad las pretensiones de la parte legitimada activa y los argumentos esbozados en la contestación, de manera que, al resolver la garantía jurisdiccional quedaron establecidos los puntos de la controversia que abordó el fallo.
6. Lo señalado se confirma al revisar la sentencia en la que el voto de mayoría, en su considerando SEXTO, precisó:

“SEXTO: ANÁLISIS Y ARGUMENTACIÓN: En la especie, la Sala advierte que lo que pretende el accionante (legitimada activa), es que le han sido vulnerados sus derechos constitucionales relativos al debido proceso, seguridad jurídica, derecho de petición y a la buena administración pública, al momento que presentó una solicitud de

dación de pago en la Corporación Financiera Nacional el día 15 de julio del 2021 *-con el fin de cancelar la obligación dineraria que tiene con la CFN-* y que fuera rechazada por la referida entidad accionada, sin darle el trámite respectivo que señala el «Reglamento que contiene el procedimiento para la recepción de bienes en dación en pago, por parte de los deudores de la Corporación Financiera Nacional B.P.», por lo que refiere que la acción ejercida por la CFN en la Resolución No. CAB-018-2021 dictada por el Comité de Administración de Bienes de la CFN en sesión de 19 de agosto de 2021, así como, la Resolución No. CFN-BP-SPAT-2021- 002-R de fecha 14 de octubre de 2021 suscritas por el Ab. Víctor Adrián Farinango Salazar en su calidad de subgerente de patrocinio de la CFN ha vulnerado sus derechos constitucionales. **En contraste, la entidad accionada sostiene** que en fecha 3 de diciembre del 2020 la parte accionante habría presentado una solicitud de dación de pago, misma que fue atendida por la CFN, en el cual se designó perito quien realizó el peritaje pertinente, indicando que la compañía al no estar conforme con el valor reflejado en la pericia, que en lo pertinente determinaba que el valor del inmueble era inferior al valor adeudado, procedió el día 17 de junio del 2021, a impugnar dicho peritaje solicitando se designe un nuevo perito, refiriendo que mediante memorando No. CFN-BP-GECV-2021-0562M de fecha 2 de julio del 2021 la gerencia de cobranza realizó una consulta a la gerencia jurídica, volviendo la parte accionante a presentar la misma solicitud de dación de pago por el mismo bien inmueble, ante lo cual emitieron el memorando No. CFN-BP-GEGB-2021-06-72M de fecha 9 de septiembre del 2021 con el cual se comunica a la compañía lo resuelto en la resolución No. CAB-018-2021 del 19 de agosto del 2021 (fs. 82) y se procede a devolver la solicitud de dación en pago, no aprobándose la solicitud de nuevo peritaje por tratarse de un inmueble que ya había sido valorado, refiriendo que no existe vulneración de derechos, que el hecho expuesto por la parte legitimada activa son incompletos que ha obviado en relatar varios puntos de relevancia.

Así las cosas, el Tribunal realiza una análisis prolijo y reflexivo, frente a los hechos planteados que han sido consignados en el texto de la demanda propuesta por el accionante, Omar Fernando Valero Pinela, por sus propios derechos y por los que representa de la compañía BRODI S.A., contemplando para el efecto las argumentaciones y alegaciones realizadas en las audiencias, diligencia que tienen como propósito aportar con elementos de convicción, que permitan formar el criterio para la decisión de la Sala.

Bajo esa consideración, examina la pretensión de la legitimada activa y la contestación del legitimado pasivo, con el fin de alcanzar su absoluto convencimiento respecto a los hechos presuntamente violatorios, por lo que, recurre a las normas pertinentes contenidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.”

7. Con la transcripción del considerando SEXTO, se evidencia que el Tribunal toma en consideración como punto de partida para su análisis y así resolver la acción, ambas posturas, la postura de la legitimada activa y de la legitimada pasiva, por lo que, con ello se cumple con lo que la Corte Constitucional ha señalado en cuanto a la motivación en garantías jurisdiccionales.
8. En esa línea el Tribunal, respetuoso y coherente con lo que la Corte ha expresado en su sentencia No 2754-17-EP/22, cuya parte pertinente se la cita:

“Este organismo, en su jurisprudencia, ha determinado el alcance de la garantía de la motivación con un carácter reforzado cuando se trata de procesos que provienen de garantías jurisdiccional. Así, una sentencia que resuelve una acción de protección estará motivada cuando, a más de enunciar las normas en las que se funda y su pertinencia de aplicación a los hechos del caso, también realiza un análisis sobre la vulneración de derechos alegada.”

9. El proponente de la acción extraordinaria de protección, manifiesta que se le vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, debido proceso, en las garantías de cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, defensa, motivación y de recurrir; y, seguridad jurídica, previstos en los artículos 75, 76 numeral 1 y 7 literales a), l) y m), y 82 de la Constitución. También alega la vulneración de los artículos 169 y 11 numeral 9 de la Constitución.
10. Al respecto, los que conformamos el voto de mayoría contestamos que en referencia a que existiría una vulneración a la tutela judicial efectiva, ello no ha sido desarrollado en su demanda, esto es, de qué forma, cuándo y cómo se le ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Ahora, sobre el derecho de las partes a la defensa, motivación y de recurrir, vemos que no precisa tampoco a qué refiere cuando expresa que el Tribunal le ha vulnerado el derecho de las partes, a la defensa y de recurrir.
11. No obstante, a pesar de no haber esgrimido argumentos sólidos, contundentes e incontrastables que se remitan a la actuación del Tribunal, los cuales determinen que ha existido una vulneración al derecho a la defensa, de la fiel revisión de la tramitación de la causa subida en grado por recurso de apelación, en ningún momento el Tribunal ha provocado indefensión, no se ha angustiado el derecho a la defensa, más por el contrario se les ha notificado todas las actuaciones a las partes procesales, dentro del marco establecido en el Art. 76, numeral 1 de la Constitución de la Republica, que reza: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. (...)”
12. En contraposición, el Tribunal en la sustanciación del recurso de apelación, arribó a una decisión con un voto de mayoría y ese fallo (hoy objeto de la acción extraordinaria de protección) se enmarca dentro de los parámetros establecidos por la Corte (Sentencia No 2754-17-EP/22), en relación a que contiene los fundamentos fácticos, fundamentos normativos y efectúa un análisis sobre la vulneración de derechos alegada.
13. A más de lo indicado, cabe señalar que sobre la base los hechos planteados, el Tribunal realizó un análisis reflexivo, exhaustivo y profundo, en el que consideró para el efecto los conceptos de los derechos constitucionales presuntamente vulnerados, recurriendo a la Constitución de la República, a la doctrina y a la jurisprudencia constitucional, siempre garantizando su

competencia y estableciendo la legitimación activa. Por tal motivo, en cuanto a la legitimación la Corte se ha pronunciado:

“34. Al respecto la Corte considera que la procedencia de una acción de protección no depende la calidad del acto que se impugna. Así, en sentencias como la No 307-10-EP/19, de 9 de julio de 2019, se señaló lo siguiente:

21, (.....) esta Corte considera que la naturaleza jurídica del acto no determina la competencia de los jueces al conocer una acción de protección, sino que el fundamento de la demanda será la existencia de una vulneración de derechos constitucionales como sucedió en el presente caso.”

14. En nuestro fallo de mayoría también hacemos nuestro otro pronunciamiento de la Corte, en el que se delinea el papel y el rol que el juez con competencia constitucional debe desempeñar frente a una acción de protección y así lo expresamos en nuestro fallo coherente y congruente, cuya parte pertinente transcribimos:

“En esa línea, enfocados en el núcleo de la presente acción, apreciamos la pretensión plasmada en la demanda, por lo que, es deber de la Sala revisar si ha existido violación de cualquier derecho constitucional, en aplicación del principio *Iura novit curia*, que lo recoge la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 4, que reza: ***La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso constitucionales.***”

De tal manera, es menester considerar que el Pleno de la Corte Constitucional ha determinado a través de su sentencia **No 102-13-SEP-CC, dentro del caso No 0380-10-EP**, en la que se realizó una interpretación conforme del contenido del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, expresando que la acción de protección **exige por parte del juez, la verificación de la existencia o no de la vulneración de un derecho constitucional en el caso que llega a su conocimiento**. La precitada sentencia de la Corte Constitucional indica, además: “En consecuencia de lo dispuesto en la Constitución y en la ley, la obligación del juez de garantías constitucionales radica precisamente sustanciar el proceso para que, una vez que se hayan cumplido todas las etapas procesales, se pueda juzgar sobre la existencia o no de las vulneraciones de derechos constitucionales.”. **(Lo subrayado y negritas es del Tribunal)”**

15. Ahora, prosiguiendo en el contraste de la alegaciones esgrimidas en la demanda acción extraordinaria de protección, vemos que, puntualiza respecto de la presunta vulneración al derecho al debido proceso en la garantía de motivación al sustentar la vulneración del derecho al debido proceso por parte de CFN y sostiene que hay una deficiencia motivacional porque los jueces “[...] no hacen un análisis de los alegatos de la CFN, respecto a las solicitudes de Dación en Pago atendidas y al peritaje realizado al mismo bien inmueble”.
16. En cuanto a ese punto el que el proponente de la acción extraordinaria de protección sugiere que existe una deficiencia motivacional en el fallo emitido, la cual se encuentra relacionada con una falta de análisis referente

a los alegatos de la CFN, ante ello, esa inconformidad expresada en esos términos, conlleva a que el Tribunal revise el fallo emitido, reiterando que dentro del análisis que efectuaron los jueces que emitieron el voto de mayoría, fue necesario recurrir no sólo a los hechos esbozados en la demanda, sino también a la postura de la legitimada pasiva en su contestación en la audiencia, a su contradicción y a la documentación acompañada, lo que permitió diagramar y detallar claramente los antecedentes (fundamentos fácticos), situación que luego derivó en una decisión motivada, que encontró la existencia de una vulneración de derechos constitucionales, la misma que consecuentemente debía ser declarada.

17. Es preciso ponderar que la motivación, como garantía del debido proceso, la Corte Constitucional estableció las pautas que incluyen un criterio rector, según el cual, toda argumentación jurídica debe tener una estructura mínimamente completa según lo establece el artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución. Las citadas pautas también incorporan una tipología de deficiencias motivacionales; es decir, de incumplimientos de dicho criterio rector: i) **Inexistencia:** Ausencia absoluta de los elementos mínimos de la motivación; ii) **Insuficiencia:** Cumplimiento defectuoso de los elementos mínimos; y, iii) **Apariencia:** Cuando a primera vista parece suficiente, pero en realidad no lo es, porque incurre en vicios que afectan a su suficiencia.
18. Refiriéndonos a lo alegado por el proponente de la acción extraordinaria de protección, en torno a que existiría una incongruencia en el fallo emitido en el voto de mayoría, primero debemos tener en cuenta en qué casos nos encontraríamos ante resolución incongruente, ante lo cual, queda claro que la incongruencia se presentaría cuando en el fallo no da respuesta a los argumentos de las partes, o cuando la sentencia no aborda cuestiones exigidas por el Derecho en determinadas decisiones, situación que no se da en el presente caso.
19. La Corte Constitucional en la sentencia No Sentencia No. 1158-17-EP/21, respecto a la **incongruencia**, nos enseña:

“87. La incongruencia frente a las partes no surge cuando se deja de contestar cualquier argumento de las partes, sino solo los relevantes⁷³, es decir, aquellos argumentos que inciden significativamente en la resolución del correspondiente problema jurídico. Para evaluar si la incidencia es o no significativa, es preciso atender al contexto del debate judicial y al estándar de suficiencia aplicable al caso concreto (véase, párr. 64 supra). Los argumentos de las partes son especialmente relevantes cuando apuntan a resolver el problema jurídico en sentido opuesto a la respuesta dada por el juzgador.

20. En definitiva, en el presente caso, el voto de mayoría para arribar a la decisión, consideró y apreció los argumentos de las partes y no dejó de contestar ningún argumento relevante que hubiera incidido o derivado en una decisión contraria. Más por el contrario, en el examen que realizaron los jueces, contemplaron las argumentaciones, los hechos postulados y las pruebas, con lo cual se advirtió que, en efecto, nos encontramos ante una

vulneración de derechos, razón por la cual en sentencia la declaramos. Sumado a ello, es importante que en el fallo en su parte resolutive se dejó expresamente señalado lo siguiente:

“Por lo expuesto en los precedentes considerandos y del examine del caso concreto, éste IV Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, **“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA”**, **RESUELVE: RECHAZAR** el recurso de apelación y consecuentemente **CONFIRMAR** la sentencia venida en grado que declara con lugar la demanda, en los términos de este fallo, debiendo continuarse con la tramitación del procedimiento de dación en pago, designándose al perito para tal efecto, sin que esto implique de ningún modo que se acepte o no la dación en pago, pues ello es una atribución que le compete exclusivamente a la Corporación Financiera Nacional.- Notifíquese.-”

21. En lo concerniente a la puntualización del proponente de la acción de protección cuando manifiesta:

“(.....)que la omisión de los jueces al no considerar que la CFN atendió de manera oportuna cada uno de los requerimientos solicitados por la compañía BRODI S.A, y que realizó consultas a las áreas pertinentes para continuar con el trámite, los llevó “[...] a una decisión errónea y claramente se puede apreciar una deficiencia motivacional en la decisión judicial”. Alega que la sentencia impugnada es incongruente al no observarse los argumentos relevantes expuestos por la CFN, “[...]y simplemente señala que el perito por haber expresado su malestar y mencionar una renuncia, este se encontraba impedido de elaborar el informe pericial”.

22. Al respecto, el voto de mayoría tomó en consideración los argumentos de la CFN, sin embargo, ninguno de esos argumentos desvaneció el hecho cierto y real verificado que determinó la existencia vulneración de los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica, incluso en la parte final del fallo, se menciona:

“En esa vertiente, queda claro entonces, que luego de esa exigente y prolija búsqueda que realiza el Tribunal en aras de establecer si, efectivamente, en este caso concreto existe violación de derecho o derechos reconocidos en la Constitución de la República, el Tribunal forma su criterio en relación al cuestionamiento formulado y responde que la legitimada pasiva (Corporación Financiera Nacional), vulneró el derecho a la seguridad jurídica y no es aceptable la alegación de la CFN en el sentido que se pueden presentar solicitudes de dación en pago cuantas veces sean necesarias, cuando el Tribunal encontró en el trámite de una solicitud derechos vulnerados.”

23. Es decir, que no es verdad que no se le haya dado respuesta a la legitimada pasiva, ya que como se puede observar en el fallo de mayoría, se refiere a la alegación que hizo la legitimada pasiva (Corporación Financiera Nacional), cuando manifiesta expresamente: “(.....) y no es aceptable la alegación de la CFN en el sentido que se pueden presentar solicitudes de

dación en pago cuantas veces sean necesarias, cuando el Tribunal encontró en el trámite de una solicitud derechos vulnerados.”.

24. En esa línea, queda claro que el fallo de mayoría de modo alguno ha omitido en referirse a los argumentos esgrimidos por la legitimada pasiva y, por el contrario, de la lectura del mismo se advierte que en él se exponen los fundamentos fácticos, los fundamentos normativos, conjuntamente con esa exigente búsqueda del Tribunal para establecer si ha existido vulneración de derechos.
25. Para finalizar, es de advertir que nuestra función como jueces garantes constitucionales fue la de prevenir una violación a los derechos constitucionales dentro de un procedimiento de dación en pago, violación que refiere a que se consideró una experticia (informe pericial) presentada con fecha posterior a la renuncia del mismo perito, es decir, que siendo la renuncia presentada antes de la presentación de un informe, evidentemente ocasionada una violación a la garantía de la legítima defensa pues, no era posible impugnar y buscar respuesta de un perito que ya dejó de intervenir; razón por la cual, es evidente que debió designarse a un nuevo perito o a su suplente conforme lo dice el Reglamento y que también fue designado a fin de que se realice tal avalúo, pues, si bien la CFN tiene su derecho a cobrar acreencias y obligaciones pendientes, existe por parte de legitimada pasiva una voluntad de poder cumplir sus obligaciones a través de una dación en pago propuesta, sin embargo, esto no obsta a que en cualquier procedimiento previsto en los propios reglamentos de la CFN en lo relativa a dicha forma de extinguir obligaciones sean incumplidos por dicha entidad, de allí que en ese punto medular estriba la violación de derechos constitucionales expuestos con claridad en nuestro fallo, pues así como la CFN tiene el derecho de cobrar sus acreencias, los deudores tienen derecho a que, en los casos de dación en pago, tengan una respuesta positiva o negativa pero garantizándole sus derechos constitucionales y que no exista vulneración de éstos. Como conclusión final, este Tribunal de mayoría precisa dejar constancia que, en ninguna manera, le ha ordenado a la CFN que acepte dación de pago alguno, sino que, previo a cumplirse con el debido proceso dentro de un procedimiento de esa naturaleza, sea la CFN quien, en ejercicio de sus atribuciones conferidas en la ley, la apruebe o no, situación que en la sentencia de mayoría quedó claramente expresado en su parte resolutive.

De esta manera, de forma clara y puntual, dejamos presentado nuestro informe de descargo en atención a lo que se nos ha solicitado.

Es de justicia,

Alfonso Ordeñana Romero

Nelson Ponce Murillo

Jueces, Sala Especializada Civil y Mercantil, Corte Provincial de Justicia del Guayas